

# **Entre la dignidad y el estigma. Los cortes de ruta de 1996 y 1997 en Neuquén y su criminalización.**

**Matías Artese \***

## **Resumen**

En todo conflicto social, además del enfrentamiento material entre sectores o fracciones sociales, podemos distinguir intervenciones simbólicas que intentan explicar esa confrontación, generando un campo de disputa por el sentido de la acción.

Remitiéndonos a episodios recientes de protesta y conflicto social, ¿cómo se relacionan las interpretaciones expresadas en el plano simbólico-discursivo con las confrontaciones materiales? ¿Quiénes producen esas manifestaciones, y en qué momentos específicos del conflicto?

Mediante el análisis de declaraciones publicadas en medios gráficos y con el relevamiento de fuentes primarias mediante la realización de entrevistas, el estudio se realiza sobre dos episodios de protesta ubicados temporal y espacialmente en 1996 y 1997 en la provincia de Neuquén. Entendidos como episodios que forman parte de un proceso de conflicto, el objetivo general de la ponencia es rastrear los indicios de criminalización y penalización de la protesta que, además de instalarse en un plano político y jurídico, también abarcó un tipo específico de construcción de conocimiento en lo que se podría llamar un *nuevo paradigma de la seguridad*.

## **Introducción**

La propuesta principal de esta ponencia es indagar en algunos episodios de protesta social de la historia reciente del país, tomando al enfrentamiento simbólico e ideológico como eje inseparable de la confrontación material. El objetivo será rastrear aquellas representaciones del conflicto a partir del registro de declaraciones producidas durante dos cortes de ruta. Uno de los hechos sobresalientes en la producción discursiva en estos períodos

---

\*- Sociólogo, becario doctoral CONICET. Miembro del Área de Conflicto Social, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. artesemat@yahoo.com.ar

es la tendencia a deslegitimar los hechos y actores que constituyen la protesta, y legitimar o justificar las políticas represivas.

Los cortes de ruta constituyen uno de los métodos de manifestación más visibles durante la década de 1990, junto a las huelgas y paros. Cotarelo e Iñigo Carrera (2004) contabilizan en el período comprendido desde 1993 a 2001 un total de 7643 conflictos y movilizaciones. En este universo, el registro de cortes de ruta asciende a más del 28 % sobre el total.

Si bien no es *a causa del discurso* que diversos sectores sociales establecen una confrontación, sí es posible acceder mediante el discurso a las definiciones que se realizan sobre los actores y de las acciones que éstos realizan. Tomo esas construcciones discursivas como *indicadores de subjetividad*: los enunciados públicos se nos presentan como observables que dan cuenta de las formas de conocimiento de lo social, es decir, de los contenidos atribuidos a hechos y procesos –en este caso referidos a episodios de protesta-. La lengua y su utilización mediante el habla constituye una base explícita para conocer una muestra de interpretaciones en un espacio y tiempo determinados, que en este caso será mediante un *soporte signifiante* (Verón, 1987) plasmado en noticias escritas y difundidas en medios masivos de información. De modo que el registro del lenguaje será la dimensión principal para acceder a la producción simbólica acerca de qué, cuándo y cómo las personas representan y explican los hechos de la realidad.

Como complemento a este tipo de observables se realizó un registro de fuentes primarias conformado por entrevistas realizadas en el mes de febrero de 2007 en las ciudades de Neuquén, Cutral Có y Plaza Huinul, dirigidos a algunos de los participantes de las protestas de 1996 y 1997. Se trata de personas que participaron desde distintas experiencias en los cortes de ruta de 1996 y 1997, involucrados desde una militancia gremial o política, o que simplemente experimentaban las primeras vivencias de acción colectiva.

Es decir que se confeccionó un registro sincrónico en base a una “etnografía de las memorias” (Auyero, 2004, p. 209) que se tiene en la actualidad de los conflictos recientes.<sup>1</sup> La motivación principal en estas entrevistas –además de conocer rasgos biográficos, motivaciones y evaluaciones de la intervención en el corte de rutas- consistió en interpelar a los entrevistados con las declaraciones que se realizaron tanto sobre los episodios de protesta

---

<sup>1</sup>- Auyero señala que hacer esta distinción es crucial puesto que “la investigación no se realizó durante la protesta (...) sino 6 años después de acontecida, centrándose por lo tanto en sus recuerdos”. Tal es este caso, con la diferencia que aquí se trata de 10 años transcurridos desde los episodios.

como sobre ellos mismos, provenientes de sus contendientes políticos (representantes del poder ejecutivo, judicial, etc.).

Mediante la misma interrogación aplicada a todos los entrevistados –la lectura de esas declaraciones emitidas años atrás- se intentó obtener un grupo de respuestas que permita un acercamiento al grado de conocimiento, explicación y opinión tanto sobre las acciones propias como ajenas en el desarrollo de la protesta.

Utilicé la técnica de “bola de nieve” (snowball) que consiste en contactar a algunos informantes y lograr que ellos presenten a otros. Es decir que el total de los entrevistados y entrevistadas no fueron establecidos a priori sino que surgieron a medida que los sucesivos contactos y búsquedas lo posibilitaron.

### **Cutral Có y Plaza Huincul, 1996. Indicios de la deslegitimación del conflicto.**

El impulso estatal dado a la exploración y explotación de petróleo junto a la construcción de represas hidroelécticas (embalse El Chocón) convirtió a la provincia de Neuquén en un polo energético que, con el transcurso del tiempo, incrementó el sector terciario de la economía regional (servicios de administración, finanzas, transporte, comercio, etc.). Los trabajadores de este sector sumados a los trabajadores del Estado abarcaron en la última década a dos tercios del total de asalariados ocupados.

Con el Estado nacional haciéndose cargo de la extracción y producción de petróleo desde la constitución de la empresa YPF, la burguesía industrial en la provincia era hasta antes de las privatizaciones prácticamente nula. El consecuente desarrollo de una burguesía comercial y de servicios en torno a aquella economía de enclave fue la base de apoyo principal en la historia del MPN, partido hegemónico en la provincia desde hace más de medio siglo: las estrategias de acumulación de los propietarios de las empresas de servicios y comercio están en relación directa con la política de regalías que deja el negocio del petróleo a las arcas provinciales.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>- “La elite dominante de Neuquén está integrada por empresarios ligados al Estado y al Partido –Sapag, Salvatori y Sobisch (los tres gobernadores) eran empresarios antes de llegar al poder, el último de hecho un empresario semifundido- y por un estrato de funcionarios estatales (profesionales o más llanamente ‘punteros’), buena parte de los cuales logran amasar en poco tiempo una considerable fortuna privada.” (Petrucci, 2006, p. 18). En 2003 el MPN contaba con alrededor de siete mil punteros en toda la provincia y más de cien mil afiliados (Favaro y Iuorno, 2005, p. 46).

Las relaciones entre dirigencia partidaria y burguesía comercial no han impedido que el MPN desarrolle un fuerte anclaje entre los sectores más postergados de la población. Es justamente el carácter de “Partido - Movimiento - Estado” -según la denominación de Favaro y Iuorno (2005)- lo que permitió un perfil de partido policlasista que utiliza el aparato de Estado desde hace décadas como usina de políticas clientelares.

Luego de la “Reforma del Estado” –caracterizado como una enorme bolsa de empleo ineficaz e ineficiente por parte de la ortodoxia neoliberal dirigente durante la década de 1990- comenzó la venta del patrimonio público atendiendo a las prioridades del mercado y de los monopolios que se adjudicaron la gigantesca estructura de las empresas públicas. Entre ellas YPF, la cual redujo su fuerza de trabajo a escala nacional de más de cincuenta mil empleados en 1990 a casi seis mil luego de las privatizaciones (Svampa y Pereyra, 2003, p. 105). Estas políticas se sintieron en carne propia en las ciudades e Cutral C6 y Plaza Huincul, donde la industria petrolera constituía el principal motor económico. En estas poblaciones que en conjunto reunían a unos 45.000 habitantes, la empresa iría despidiendo paulatinamente a la mayor parte del personal, alrededor de 3.500 personas.

Tanto la situación económica estructural (el enorme despojo laboral en poblaciones relativamente pequeñas) como de representación política en estado crítico (el gobierno de Sapag estaba fuertemente cuestionado por la población local), forjaron la situación en la cual se desarrollarían las protestas de 1996, luego revitalizadas y retomadas en 1997.

### **Génesis y desarrollo del conflicto**

Hacia junio de 1996 se hablaba en Cutral C6 y Plaza Huincul de la instalación de una importante inversión privada. Desde 1992 corría una versión que concentraba en la población las esperanzas de atenuar el crucial problema de desocupación, basada en la posibilidad de instalar una planta de fertilizantes de origen canadiense. Las tratativas con la empresa “Cominco-Agrium” comenzaron durante la anterior administración de Sobisch, opositor a Sapag en la interna del MPN, quien se había comprometido a financiar el emprendimiento con una suma de cien millones de dólares.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>- A comienzos de la década de 1990 surge una disputa interna de la cual resulta la división entre *amarillos* (corriente liderada por Sapag) y *blancos*, (línea conducida por Sobisch –inicialmente cercano a Sapag-, de carácter tecnocrático y liberal). La disputa marcó los últimos quince años de existencia de este partido.

Tras el anuncio de la paralización de las negociaciones emitido por una radio local el 20 de junio de 1996, algunos vecinos llamaron a una manifestación para las 16.00 hs. A partir de allí comenzaría la interrupción de la Ruta Nacional 22 que une las ciudades de Cutral-Có y Plaza Huincul con la ciudad de Neuquén al este y con las ciudades cordilleranas al oeste. En pocas horas los cortes se multiplicaron en distintos puntos de la ruta, con la movilización de cientos de personas. Los primeros en apostarse en los cortes fueron docentes y estudiantes, que luego fueron acompañados por operarios desocupados de la ex empresa estatal YPF junto a sus familias; además de asalariados y fracciones de la pequeña burguesía local, cuentapropistas, e incluso algunos dirigentes locales de los partidos mayoritarios como el Movimiento Popular Neuquino, el Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical.

El objetivo central de la movilización era reclamar la presencia del gobernador Sapag y encontrar de manera inmediata alguna solución a la crisis provincial, ante el fracaso de reconversión productiva que personificaba la industria de fertilizantes. El gobernador no se hizo presente, y los piquetes se extendieron frente al acceso de la planta destiladora de Plaza Huincul, perteneciente a la ya privatizada Repsol-YPF. A raíz de esta acción se reforzó la cantidad de efectivos y patrullas de seguridad privada de la empresa en el perímetro de la planta, además de solicitar la presencia de la policía provincial.

Durante los primeros días de protesta circuló un texto que se había leído en diversas radiodifusoras de la zona. Expresaba condensadamente los objetivos de la acción de los miles de vecinos movilizados, su percepción de la situación crítica en la que se encontraban y sus motivaciones:

“Hoy el pueblo de Cutral Có y Plaza Huincul está de pie, luchando por la dignidad de su gente, cortamos las rutas de ingreso a estas dos ciudades porque pretendemos hacer escuchar nuestros derechos en búsqueda de una reactivación económica real y concreta. La desocupación, el hambre y la falta de respuestas del gobierno provincial nos llevaron a esto. Si hoy cortamos las rutas es porque sentimos indignación, marginalidad y olvido. Nuestra gente que hoy ocupa las rutas es la misma que durante varias décadas brindó su trabajo de sol a sol para que esta provincia y el país creciera... Entonces considerando la “falta de respuestas oficiales”, lo mínimo que podemos pretender es una reparación histórica. (...) Ya no nos sirven las mentiras de algunos segundones... Hoy queremos a Felipe Sapag sí o sí.” (La mañana del Sur, 23-06-96).

Con el transcurso de los días el corte se propagaría a otros accesos (rutas provinciales Nº 17 y Nº 10) y a las “picadas”, o caminos de acceso a los pozos petrolíferos trazados por las mismas compañías. Los camiones también tenían el acceso restringido, y comenzó a sentirse el desabastecimiento de combustible y de alimentos frescos (lácteos, pollos y carne).

Ante esta situación se produjeron actos de organización y solidaridad entre los pobladores, como el abastecimiento de alimentos y combustible a los salones comunitarios de los barrios, y la disposición de vehículos y taxis que acercaban gratuitamente a quienes se dirigían a los puestos de bloqueo.

Cada piquete se autorregulaba mediante el consenso y la discusión en asambleas tanto para definir las normativas internas de funcionamiento como para las decisiones que se debían tomar día a día. De manera que los manifestantes en su acción cotidiana avanzaron - con diversos matices y prácticas heterogéneas- hacia un intento de reconocimiento entre iguales, a una dinámica autónoma de toma de decisiones.<sup>4</sup>

Desde el comienzo del conflicto se registraron en los medios gráficos diversas caracterizaciones que provenían principalmente del gobierno provincial, en contraposición a las razones de los manifestantes. Se comenzaba a registrar un enfrentamiento en el plano subjetivo, una disputa por el sentido de las acciones en el que aparecían indicios de deslegitimación de la protesta:

**“No puedo ir a un lugar donde hay insubordinación. Ellos están en una actitud de fuerza que no es legítima. Ocupar el camino e impedir que la gente se mueva y trafique es un delito.”** Felipe Sapag, Gobernador, MPN. *Río Negro*, 22-6-96.

Estas caracterizaciones todavía no contenían todos los elementos de desvalorización ideológica que luego serían regulares en los posteriores cortes de ruta surgidos en una importante cantidad de ciudades de todo el país. Algunos supuestos surgen al respecto: en primer lugar, los manifestantes de este primer corte de rutas conformaban un heterogéneo campo de personificaciones en el que no estaba claramente identificada la participación de organizaciones gremiales o políticas que generaran estigmatizaciones de tipo ideológico. Aunque esto no evitó que sí se registraran definiciones con cargas morales negativas, como veremos más adelante.

En segundo lugar, hacia 1996 el corte de ruta como acción colectiva de protesta todavía no había adquirido el grado de sistematicidad que sí tendría años más tarde -sin olvidar la pueblada de Santiago del Estero de fines de 1993, que de todas formas no consistió en un corte de rutas en sí mismo-. Es decir que las caracterizaciones negativas se irían

---

<sup>4</sup>- Aunque se trate de un saber provisorio (no se trata de una forma representativa constante sino coyuntural, surgida eventualmente en torno a un conflicto), nos habla de un modelo de organización y representatividad diferenciado de la política tradicional, ligada a la heteronomía o a la verticalidad en la toma de decisiones. Esta metodología también se registraría en los posteriores cortes de ruta del país aunque estuvieran distanciados físicamente entre sí. Luego conformaría la dinámica interna de muchas de las “organizaciones piqueteras” que impulsaron esos cortes y que luego se consolidaron como agrupaciones políticas (los diversos MTD del conurbano bonaerense o la UTD -Unión de Trabajadores Desocupados- de General Mosconi en Salta).

profundizando proporcionalmente a la frecuencia e intensidad de las luchas y al componente social que las llevaba a cabo (trabajadores desocupados organizados como tales, gremios contestatarios, etc.).

A medida que se hacía más fuerte la idea del desalojo por la fuerza vía intervención de la Gendarmería, se establecían mensajes ligando la ilegitimidad de la protesta con lo delictivo y lo violento:

“(La investidura de gobernador) corre peligro de ser maltratada o regalada por un capricho de **alguien que está cometiendo un delito**. (...) Prácticamente todo el interior de la provincia ha quedado aislado. **Los que protestan no representan nadie...**”. Felipe Sapag, Gobernador, MPN. *Río Negro*, 24-6-96.

La interpretación de los hechos por parte de sus protagonistas era muy distinta a la de los funcionarios del gobierno. Rita Santarelli (ex empleada no docente en la secretaría de extensión universitaria de la UTN y ex diputada por la UCR), ante la lectura de las declaraciones que hablaban de delito e ilegalidad, señala lo siguiente:

“El ánimo social era compartido por todos. Nadie pensó que la protesta era ilegítima. Yo tenía amigas que iban con trajecito y tacos altos a ver qué pasaba, saliendo del laburo. (...) Todos los días, hasta los más reacios, se sumaron a la ruta a ver qué pasaba. Me parece que si todo el mundo acciona algo, es totalmente legítimo.”

Juan Carlos Garcés (ex operario de YPF) opina sobre el carácter representativo de la pueblada y sobre la *dimensión delictiva* que comenzó a circular desde el gobierno provincial:

“La constitución tiene previsto el derecho a peticionar ante las autoridades, a manifestarse libremente, asociarse, agremiarse, a publicar sus ideas sin censura, a participar en movimientos políticos libremente. Nosotros estábamos ejerciendo un derecho constitucional de peticionar ante las autoridades la falta de trabajo, la exclusión social. ¿Está claro eso? No consideramos en ningún momento que era delito. Porque siguen habiendo miles de cortes y no es delito. ¿La jueza va a procesar a 40 mil tipos? ¿De qué los va a condenar, a ver? El que comete delito es el Estado opresor, el que hambrea, el que somete, el Estado que afana en nombre de los pobres.”

Omar Pinchulef actualmente es obrero en la fábrica de cerámicos Zanón. En 1996 tenía 25 años y era cadete de un policlínico en Neuquén. Opina acerca de la representatividad:

Por ahí están acostumbrados a que haya un líder de todo movimiento que represente... Por ahí pretendían que haya alguien que les diga lo que estaba pasando. Y en ese momento era todo el pueblo el que estaba ahí, ¿qué más verdad que esa querés? Ahí estaba el pueblo, era la representación completa. (...) Evidentemente no se hacen cargo que si la gente está ahí

es porque hay una necesidad que los motiva y esa necesidad fue generada por las decisiones políticas que el Estado tomó, o por la falta de previsión en las políticas.

La desobediencia a las autoridades se convirtió en un hecho condenable y prioritario a resolver, antes que los motivos materiales que desencadenaron la manifestación. La protesta, considerada ilegal, también generó mensajes que la emparentaban con la violencia, al tiempo que el llamado a que sea disuelta por medio de la fuerza se hacía más notorio:

**"No es con violencia como se puede solucionar el problema.** La crisis está culminando; la gente que está en la ruta 22 debe desalojarla inmediatamente. Felipe Sapag, Gobernador, MPN. *Río Negro*, 25-6-96.

"No pueden entorpecer una vía de comunicación. Si no acatan la orden, se desocupará la ruta mediante la fuerza pública." Margarita Gudiño de Argüelles, Jueza federal. *Página 12*, 25-6-96.

"Vamos a atravesar los piquetes, no puede ser que no nos dejen salir de nuestro pueblo. Que vengan los gendarmes y entren a los garrotazos, ya me forrearán cuatro días, no aguanto más. No nos pueden manejar el pueblo dos o tres personas, vamos a pasar." César Pérez, Intendente de Plaza Huincul, *La Mañana del Sur*, 25-6-96.

Aunque cinco días antes el entonces intendente de Plaza Huincul había intentado formar una alianza con una parte de los vecinos en los mismos piquetes, ahora sin eufemismos exigía el uso de la *violencia legal*, diferenciada de la violencia ilegal que supuso una protesta de ésta índole.

La jueza Federal de Neuquén Margarita Gudiño de Argüelles solicitó al Ministerio del Interior el traslado inmediato de fuerzas del grupo antimotín de Gendarmería. Fue también en su juzgado donde se inició la causa penal que involucró a los pobladores que ejercían la protesta.

El día 24 de junio arribó un grupo de la Gendarmería a la capital neuquina en tres aviones Hércules junto a unos 400 efectivos y 33 vehículos (camiones hidrantes y una tanqueta), además de varios perros adiestrados. Al día siguiente la jueza dio la orden de desalojo de la Ruta 22. Desde las 10 hs. se produjeron diversos choques entre los 400 efectivos de la Gendarmería y varios cientos de personas –muchos de ellos jóvenes con pasamontañas o capuchas, signo que luego se difundiría a nivel nacional en los posteriores cortes de ruta- que decidieron enfrentar a las fuerzas de seguridad. La Gendarmería arremetió contra las primeras barricadas disparando gases lacrimógenos y balas de goma, además de largar varios perros adiestrados al ataque de los jóvenes manifestantes que ofrecieron



resistencia. Como respuesta a la primera embestida, los gendarmes comenzaron a recibir una lluvia de cascos.

El enfrentamiento arrojó un saldo de 27 manifestantes heridos y un detenido. Luego de avanzar unos cientos de metros, la formación militar se topó con alrededor de 20 mil personas sobre la ruta (cifra que surge tanto de las crónicas de los medios gráficos como del relato de los manifestantes). La envergadura de la manifestación provocó que no se siga adelante con la represión y que se tome una postura dialoguista. El encuentro derivó en una retirada de la jueza y de la fuerza de seguridad, con gritos de algarabía de los manifestantes que consideraron el hecho como un triunfo.

Se logró que el gobernador viaje a las ciudades en conflicto y se comprometa a confeccionar una serie de medidas que permitan dar fin a la protesta. En la reunión participaron algunos de los delegados de las asambleas protagonistas de los cortes de ruta, que exigieron soluciones inmediatas (la restitución de servicios de luz y agua a quienes se les había cortado por falta de pago, la partida de bolsones de comida, vestimenta y calzado para niños y, principalmente, la promesa de generación de puestos de trabajo). Luego del encuentro las rutas fueron totalmente despejadas a partir de las 16 hs. del día 26 de junio.

Los enunciados registrados durante el transcurso de la protesta fueron rastreadas en cinco diarios (tres nacionales –*Nación*, *Clarín* y *Página 12*- y dos provinciales –*La Mañana del Sur* y *Río Negro*), desde los primeros días de junio de 1996 hasta principios de julio. El registro resultante está compuesto por un total de 95 declaraciones que a partir de su contenido fueron diferenciadas en dos dimensiones: a) definiciones, caracterizaciones y calificaciones y b) reclamos, denuncias, exigencias.

Dentro del primer grupo -56 declaraciones- el 43 % consideran justos a los reclamos, mientras que el 21 % caracterizan a gobierno provincial como prebendario, ineficaz, et. El 34 % están destinadas a vincular los hechos de protesta con imágenes cercanas a lo ilegal, las acciones violentas y perjudiciales para las instituciones. Este tipo de caracterizaciones provienen en su gran mayoría (casi un 80 %) de despachos oficiales.

Luego del encuentro en la ruta los mensajes de los funcionarios gubernamentales son publicados proporcionalmente en mayor medida, representando casi el 50 % del conjunto de declaraciones, quedando relegadas las declaraciones de los manifestantes o de miembros de partidos políticos. En algunos casos confirman la deslegitimación de la protesta caracterizando negativamente a los manifestantes. En algunos casos incluso se insinuaba que la protesta conformaba un hecho fuera de la *normalidad*. Tal es el caso de interpretar la protesta como un estado de patología mental:

**“Lo que está ocurriendo es una locura colectiva con el único espíritu de destruir a Felipe Sapag y con el interés mezquino de no reconocer una trayectoria (de Sapag) de más de 30 años al servicio de la provincia.”** Alberto “Tito” Fernández, diputado provincial. *La mañana del Sur*, 28-6-96.

Por otra parte, más del 20 % del total de declaraciones que contienen reclamos o denuncias están dirigidas a exigir la finalización de la protesta llamando a la intervención de la fuerza pública en el conflicto. Un poco más de la tercera parte de estos reclamos están destinados a solidarizarse con la protesta y a reivindicarla, sobre todo luego del enfrentamiento con la Gendarmería y de la decisión de la jueza de no avanzar con la represión. Es el caso del mismo gobernador Sapag, quien en un comienzo deslegitimó la protesta tratando a sus integrantes de delincuentes y calificando como ilegales sus medidas. Su percepción pública fue variando con el devenir del conflicto pues una vez presente en las ciudades y sin más remedio que tener que pactar con los manifestantes, felicitó a los mismos por “haber llamado la atención al país” y les pidió confianza para que “comiencen a resolverse los problemas” (*Página 12*, 27-6-96). Este tipo de declaraciones deben entenderse en el marco de las disputas entre partidos tradicionales que arrojan entre sí acusaciones de distinto tenor, eventualmente apoyando la manifestación. Algunas se enmarcan en la afrenta interna blanco-amarilla que caracteriza al MPN durante el período estudiado. O pretenden desligarse de la decisión de haber arribado al corte con la Gendarmería, sugiriendo que ésta era una decisión que excedía al gobierno provincial. Es decir, apoyan a la protesta en una coyuntura de ataque a sus contrincantes políticos. Es indicativo de esto el hecho de que más del 40% de las declaraciones con denuncias o acusaciones fueron producidas entre funcionarios políticos que se responsabilizan mutuamente por la situación crítica.

Se puede decir que durante todo el episodio de protesta los enfrentamientos materiales fueron acompañados casi al unísono por una producción discursiva que les otorgó sentido. Se destacan tanto las que están destinadas a estigmatizar o caracterizar negativamente la protesta como las que defienden la postura de los manifestantes y se solidarizan con ellos. Las que se agrupan en el primer caso son publicadas con mayor intensidad justo el día posterior a los enfrentamientos (26 de junio), luego de la retirada de la jueza federal (es decir que fueron producidas el mismo día del enfrentamiento). Ese día los enunciados superan del promedio de los días anteriores, acentuándose en el preciso momento en que el encuentro físico se estaba llevando a cabo. Allí salen a la luz voces que insisten en la calidad ilegal e ilegítima de la protesta, argumentando que es detractora de las instituciones y del Estado de Derecho.

Apuntaban a conformar un *otro* colectivo que había irrumpido contra un sistema de normas y que desafió durante varios días a las autoridades.

### **De la protesta docente al “rebrote subversivo”.**

Casi nueve meses después de la masiva movilización de 1996 resurgió el conflicto en la provincia de Neuquén. Los docentes provinciales iniciaron un reclamo en torno a la recomposición salarial y a la avanzada de la Ley de Educación Federal.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) conforma un poderoso sindicato provincial que durante los años '90 mantuvo una posición fuertemente contestataria a las reformas educativas generadas en el Ejecutivo Nacional y trasladadas a la provincia con la venia del gobierno de Sapag. Este sindicato aglutina no sólo a trabajadores estatales de la educación sino también a docentes de colegios primarios y secundarios privados y personal no docente (porteros, administrativos, celadores, etc.). En cuanto a la gestión y representación, en 1997 ATEN era reconocido incluso por los docentes sin ninguna militancia y por la población neuquina en general como un sindicato plural donde primaban las prácticas asamblearias, con un importante diálogo con los estudiantes y sus padres.

Las consignas del reclamo se centraban en la derogación de algunos puntos de la Ley Federal: la excesiva cantidad de alumnos por aula, el incremento de la jornada laboral -que imposibilitaba cubrir el doble turno-, y la eliminación de cargos docentes y de talleres de actividades especiales en las escuelas. Simultáneamente se demandaba el aumento del subsidio por desempleo y la renovación de contratos de trabajo de docentes y de empleados no docentes.

El gobernador anunciaba el día 7 de marzo que “los maestros ejercen una extorsión a los padres para que ejerzan presión sobre el gobierno para que les aumentemos el sueldo, pero saben bien que la provincia está en emergencia y no puede pagar más sueldos de los que paga” (*La mañana del Sur*, 07-03-97).

El gremio convocó a un paro general en colegios primarios y secundarios, estatales y privados para el día 10 de marzo, fecha de inicio del ciclo lectivo. El día 12 de marzo se interrumpió durante una hora la ruta 22, que une la ciudad con la vecina ciudad de Plottier y con Plaza Huincul y Cotral C6 hacia el oeste, y hacia el este con la ciudad de Cipolletti. Unas diez mil personas marcharon junto a los maestros en el centro de la capital, con epicentro en la casa de Gobierno. Hacia el 26 de marzo ya había decenas de camiones varados en ambos

lados del puente, lo que significaba un elemento más de conflicto. Resurgían así los problemas de desabastecimiento de productos alimenticios en la capital y en las ciudades del interior de la provincia.

Los encuentros entre dirigentes gremiales y el gobierno de la provincia tratando de llegar a un acuerdo se convirtieron en reuniones infructuosas. Desde el gobierno se decía que la postura de los gremialistas era intransigente y que se trataba de “una huelga política de ideólogos de izquierda que buscaban el desorden y la desestabilización” (*La Mañana del Sur*, 27-03-97). Con estas palabras, el gobernador y su gabinete dejaban todo “en manos de la justicia”: la jueza Margarita Gudiño de Argüelles una vez más intimaba a desalojar los caminos en un plazo de 48 hs. Nuevamente arribaba a la provincia un avión Hércules con efectivos de Gendarmería, mientras los docentes declaraban estar dispuestos a resistir en las rutas. El jueves 27 de marzo se registraba el primer enfrentamiento cuando a las 7 hs., cuando unos 250 efectivos de la Gendarmería Nacional en conjunto con la policía provincial rompieron las barricadas colocadas del lado neuquino lanzando gases lacrimógenos y avanzando con camiones hidrantes sobre unos dos mil manifestantes.

Luego de la represión, miles de maestros empapados y golpeados marcharon acompañados por la población neuquina a la casa de gobierno. La huelga no se levantó: el 1º de abril de 1997 llevaba ya 22 días ininterrumpidos, y el dialogo entre los gremios y el gobierno estaba definitivamente cortado. Se incorporaba un nuevo reclamo surgido de la misma huelga: se exigía el pago de los días que los docentes asistieron a las marchas, que el gobierno provincial insistía en no pagar.

Además de expandirse territorialmente, el conflicto crecía en intensidad y en participación. Las delegaciones de ATEN de Cutral C6 y Plaza Huincul junto a un grupo de más de cien vecinos decidieron apoyar a la protesta de los docentes de la capital neuquina interrumpiendo una vez más la ruta N° 22. La comunidad de estas ciudades se involucró en la protesta mediante la “Comisión de Padres”, que aglutinó a un grupo de padres de estudiantes secundarios sensibilizados por la cuestión educativa en la provincia y por la situación social en general, que no había cambiado estructuralmente desde la pueblada realizada el año anterior.

Los actos de protesta se multiplicaban por toda la provincia, involucrando a 18 localidades que apelaron al corte de diversas rutas. La Subsecretaría de Gobierno, Justicia y Trabajo de la provincia declaró ilegal la protesta docente, por haberse negado a la conciliación obligatoria.

La Justicia Federal ordenó el desalojo de la ruta N° 22 a la altura de Plaza Huincul y el gobierno nuevamente llamó a la movilización de tropas. Dos aviones de Gendarmería y tanquetas llegaban a Neuquén y se sumaban a los efectivos que ya estaban apostados en una localidad cercana para reforzar el operativo de desalojo. El 12 de abril a las 6 de la mañana, unos 350 gendarmes avanzaron con una topadora y un camión hidrante contra las barricadas, al tiempo que atacaban con armas antimotines, gases lacrimógenos y perros adiestrados, siguiendo esta vez la orden del juez Oscar Temi (la jueza Gudiño de Argüelles había desistido al frente de la causa).

Quienes opusieron resistencia en primera línea fueron jóvenes, en su mayoría desocupados, además de estudiantes secundarios. Se hacían llamar “fogoneros”, en contraposición a los “piqueteros” de 1996, pues según ellos habían “traicionado” a la población al haber claudicado con una serie de medidas sólo paliativas ofrecidas por el gobierno.

Luego del primer choque, centenares de jóvenes siguieron haciendo frente a las tropas en una contienda que duró más de 5 horas. Las escaramuzas se repitieron varias veces a lo largo de toda la ruta que cruza a las ciudades. Según el relato de los vecinos, la Gendarmería desalojó a los manifestantes pero a medida que avanzaba los jóvenes nuevamente ingresaban al camino a espaldas de la fuerza, rearmando las barricadas y atacándolos por detrás. En cuestión de horas los gendarmes quedaron sin munición ante la embestida constante de piedras lanzadas desde distintos flancos. Debieron seguir de largo por la ruta hacia el aeropuerto de Zapala, sin poder retornar a las ciudades. La policía provincial avanzó en las calles aledañas que permanecían bloqueadas y efectuaron disparos. Uno de los tantos disparos provocó la muerte de Teresa Rodríguez, empleada doméstica de 24 años.<sup>5</sup> Hubo, además, alrededor de 15 heridos y más de 30 detenidos.

Durante todo el conflicto nuevamente se alzaron voces de descalificación de quienes participaron en la protesta. Ésta adquirió una magnitud, permanencia e intensidad mucho mayor a la de 1996. El factor político ideológico tuvo un peso específico en la caracterización proveniente del gobierno y dirigida a los dirigentes docentes, al acusarlos de ser desestabilizadores y perjudiciales para el orden social. Esto ocurrió desde el principio del conflicto y fundamentalmente luego del enfrentamiento en Cutral C6:

---

<sup>5</sup>- Frente a un estudio de la policía provincial que sugería que el disparo provino de los manifestantes, dos físicos del Instituto Balseiro realizaron una pericia acústica para conocer el origen de los disparos. La conclusión fue contundente: “no tenemos evidencia de que haya habido disparos de otro lugar que no sea de grupos de policías. (...) El tiro está bien localizado pero no es claro quién lo dispara: es un grupo de por lo menos tres policías que no podemos individualizar.” (Página 12, 21-09-00).

"Este conflicto se transformó de gremial en político. Y **fue manejado por ideólogos de izquierda que coparon el gremio docente.**" Felipe Sapag, Gdor. Neuquén. *Clarín*, 31-3-97.

**"ATEN es un partido trotskista que esta utilizando la metodología del foquismo** consistente de generar un conflicto e un lugar, no dejar ninguna puerta para resolverlo y cuando explota y hay un muerto extender el conflicto al resto del país". Eduardo Amadeo, Secretario de Desarrollo Social. *Página 12*, 16-4-97.

Era de público conocimiento que la dirección de ATEN en 1997 estaba conformada por una lista de izquierda. Este dato real se expuso públicamente bajo una conceptualización sesgada que apuntaba a considerarlo como algo negativo por sí mismo. En el contexto de la historia de la última mitad del siglo XX, este tipo de interpretaciones se desprende de un esquema de conocimientos previos sobre las luchas políticas. Se trata de una explicación que retoma elementos "aletargados", pues son discursos que no se escuchan ni se dicen en cualquier circunstancia, pero que se restablece durante dinámicas y coyunturas particulares de conflicto.

Liliana Obregón, docente de literatura y miembro de la dirección de ATEN seccional Neuquén en 1997, comenta estas observaciones:

"Copar el gremio docente es referirse a la dirección. Ellos no podían entender cómo en Neuquén una comisión que abiertamente se decía marxista podía haber ganado las elecciones. No lo podían entender. Y que la comisión que dirigía el conflicto fuera de Neuquén Capital. Todo el mundo sabía eso, por eso la gente no les daba ni cinco de bolilla."

Marcela Romero también era docente de letras, pero no formaba parte de la dirección de ATEN ni era delegada. Describe algunos aspectos internos de gremio luego de leer aquellas declaraciones:

"Más allá de toda esa publicidad, al tener las asambleas y una gran participación, la gente sabía que lo que se hacía era lo que ellos habían votado. Porque en realidad la conducción era para ejecutar lo que la asamblea decidía. Entonces eso inhabilita todo este tipo de declaraciones. Yo no estaba en la conducción en ese momento, pero vos estabas con los compañeros y te decían 'eso es mentira porque esto lo decidí yo'. Porque primero lo discutimos en los distritos, estábamos horas discutiendo, y en ese proceso vos ibas viendo como viene la mano, qué es lo que se podía hacer, cómo viene el gobierno... Todas esas discusiones políticas se van desarrollando en la asamblea... Se discutieron cosas muy gruesas, como la conciliación obligatoria, qué era, qué significaba para el trabajador, cuál fue su origen... Todo ese tipo de cosas se discutieron en lo cotidiano. Por eso cuando Sapag decía que había infiltrados toda la gente se le reía porque no existía eso, porque la que decidía era la base".

Daniel Zapata es docente de historia en colegios secundarios de Neuquén. Era delegado en 1997 y lo sigue siendo en la actualidad; y reflexiona sobre este tipo de declaraciones:

“En política el infiltrado es un tema muy propio de los ’70 y era usado para descalificar. Nosotros no lo vemos así, ponerle el mote de infiltrado a una persona, ¿que quiere decir? En realidad hubo compañeros que venían de otros lugares, que trataban de influenciar y que tuvieron participación en asambleas, pero cuando los hechos de lucha son de masas, no se dan esas cuestiones. La gente no es tonta y no la vas a llevar para donde quieras. La decisión que se impuso siempre fue la decisión soberana de la asamblea, y en este sentido cualquiera podía bajar una moción. Y eso es lo más legítimo posible, si es que esa moción se desarrolla en la asamblea. Porque en la medida en que se desarrollan las tendencias en la asamblea la gente cuando vota tiene la claridad para saber qué vota. Y cuando se vota con claridad las medidas se sostienen. Nunca hubo reparos a quien quería expresarse. En definitiva, el tema de los infiltrados (...) no se puede condenar o desacreditar a una persona por pertenecer a un partido político”

Los atributos sobre violencia e ilegalidad que se plasmaban en el episodio de junio de 1996, menos de un año más tarde incluían un factor de estigmatización ideológica más explícito. Luego de la represión, desde el poder se relataban los hechos de la siguiente manera:

**“Hay grupos rearmándose en el ámbito de la subversión, realizando ejercicios pre-revolucionarios. Son grupos que han actuado en otra época y que ahora están rearmándose en el ámbito de la subversión.** Habría que preguntarse si quienes son los que mataron a Teresa Rodríguez.” Carlos Menem, Presidente. *Página 12*, 16-4-97.

**“Es el resultado de una escalada de violencia. (...) No eran docentes los grupos que en la noche del viernes (11 de abril) ocupaban las rutas.”** Susana Decibe. *Clarín*, 13-4-97.

**“Es intolerable el corte de rutas, poner en peligro la seguridad de las personas, la violencia.”** Carlos Corach, Ministro Interior. *Clarín*, 14-4-97.

**“No se puede volver a una etapa pre-subversiva”** Eduardo Duhalde, Gobernador Bs. As. *Clarín*, 15-4-97.

**“La usurpación de bienes de dominio público, los daños causados a la propiedad, el impedimento al libre ejercicio de los derechos de terceros, lejos de constituir una forma legítima de petición a las autoridades, implican un atentado contra la convivencia pacífica y el efectivo goce de los derechos de todos y cada uno de los argentinos.”** Jorge Rodríguez, Jefe de Gabinete. *Clarín*, 15-4-97.

Sin haberse comprobado todavía de dónde provino el disparo que mató a Teresa Rodríguez, los manifestantes “subversivos” son directamente identificados como asesinos. La subversión, con una clara reminiscencia a la década del ’70, es sacada a luz durante estos

momentos. El andamiaje conceptual rescatado del pasado incluso aborda una versión primaria y maniquea del conflicto social, como lo es la “teoría de los dos demonios”:

**“Los encapuchados y la bombas molotov me provocaban el funesto recuerdo de la guerrilla.** Y el discurso del presidente Carlos Menem, acusando a los manifestantes de prácticas subversivas, me hacía recordar la trágica retórica de las juntas.” Rodolfo Terragno, presidente de la UCR. *Río Negro*, 17-4-97.

Además de la acusación de un rebrote subversivo, se intentó instalar un elemento recurrente en la construcción social de las disputas ideológicas y culturales en la historia del país. La idea de subversión del orden, de violencia y de ilegalidad se relaciona a la imagen de lo foráneo, de una otredad externa a una comunidad, que degrada el grupo social generando el enfrentamiento:

“Los graves hechos de Cutral Có exceden el inicial conflicto docente del descuento del plus por zona desfavorable, y muestran con dramatismo, en la lamentable muerte de una joven, **el resultado de una escalada de violencia.** (...) **No eran docentes los grupos que en la noche del viernes (11 de abril) ocupaban las rutas,** incluso en contra de la voluntad de aquellos de la asociación de padres.” Susana Decibe, Ministra Educación de la Nación, *Clarín*, 13-4-97.

**“Hubo grupos armados con bombas molotov y armas de grueso calibre, que no están vinculados al conflicto docente”** Carlos Silva, Ministro Gobierno, Educación y Justicia de Neuquén. *Clarín*, 14-4-97

No sólo se planteaba una situación donde un grupo de “ideólogos” habría “copado” el gremio docente -es decir, lo habría penetrado o infiltrado- sino que también en la misma comunidad habrían aparecido elementos “extraños”. El reclamo de los docentes y de los pobladores, además de ser violento e ilegal, no era auténtico.

## **Consideraciones finales**

Durante la protesta de 1996 la decisión de reprimir la masiva movilización de dos ciudades finalmente quedó trunca ante la “sensibilidad social” de una jueza. En 1997 la movilización de recursos materiales y humanos fue disciplinada con una demostración más contundente de violencia, mediante la entrada de las fuerzas de seguridad y el asesinato de una vecina de la ciudad. Luego del disciplinamiento, en ambas ocasiones la respuesta de los gobiernos se resumió en una suma de promesas incumplidas o cumplidas de manera rudimentaria, sin un plan estratégico para la región que encauce las demandas sociales.



En su enorme diversidad, las interpretaciones de los conflictos nos hablan de *tomas de conciencia* de los hechos, es decir, conceptualizaciones o construcciones cognoscitivas de la realidad que en muchas ocasiones son contradictorias. Los distintos contenidos de las declaraciones públicas en momentos específicos de la protesta nos permiten arribar a un indicio de las *representaciones del conflicto*, ya sea físico como ideológico.

Las declaraciones que hemos visto hasta aquí fueron producidas y difundidas en momentos específicos del conflicto. Signada por acusaciones y caracterizaciones de distinta índole, la desvalorización de la protesta y de sus actores es inescindible de marcos ideológicos dominantes. Si bien la “presentación en sociedad” del corte de rutas hecha en junio de 1996 gozó de cierto apoyo de una parte de la población local y nacional en un escenario de constante recrudecimiento de los niveles de desocupación y de marginalidad social, es también en estos momentos cuando se registra un comienzo de sistematización de caracterizaciones negativas de esas luchas, apoyadas por el intento de legitimar las acciones represivas. Aquellos emblemas de lucha que significaron los jóvenes en las rutas y la resistencia de un pueblo frente a la represión, fue desde un principio acompañada por una “*contraidentidad piquetera*” cargada de figuras negativas. Se trata de una construcción disímil y en pugna que se realiza sobre los mismos *observables* de la realidad: una disputa no sólo física sino también simbólica donde entran en colisión construcciones interpretativas antagónicas de los hechos.

Con los posteriores episodios de protesta que ocuparon la escena política nacional en el transcurso de la década de 1990, la terminología “piqueteros” se instaló como sinónimo de delito, vandalismo, vagancia, reclamos injustificados, avasallamiento de los derechos de los demás, activismo político rentado, etc. Esas marcas sociales, estos *signos compartidos* fuertemente arraigados, colocaron a los episodios de protesta durante buena parte de la década de 1990 (período donde la protesta social fue fuertemente reprimida) como sinónimo de peligrosidad social y política; un escenario en donde quienes luchan y ejercen la protesta fueron colocados en las antípodas del “orden social democrático”.

## Bibliografía citada y consultada

- Armony, V. y Kessler, G. (2004). Imágenes de una sociedad en crisis. Cuestión social, pobreza y desempleo. En M. Novaro y V. Palermo, (Eds.), *La historia reciente. Argentina en democracia*. (pp. 91-114). Buenos Aires: Editorial Edhasa.
- Auyero, J. (2004). *Vidas Beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmas.
- Cotarelo, M. C. e Iñigo Carrera, N. (2004). Algunos rasgos de la rebelión en Argentina 1993 – 2001. *PIMSA* N° 8, 125-138.
- Díaz, N., Fernández, N. y Gerez, L. (2006). *Cutral Có - Plaza Huincul y Rincón de los Sauces. Dos modelos de crecimiento contrapuestos*. Segundas Jornadas de Historia de la Patagonia. Cipolletti y General Roca, 2, 3 y 4 de noviembre de 2006.
- Favaro, O. y Iuorno, G. (2005). Poder político y estrategias de reproducción en los territorios de Neuquén y Río Negro, Argentina. 1983-2003. En O. Favaro (Ed.), *Sujetos sociales y políticas. Historia reciente de la Norpatagonia argentina*. Buenos Aires: Editorial La Colmena.
- Massetti, A. (2004). *Piqueteros. Protesta social e identidad colectiva*. Buenos Aires: Editorial de las Ciencias.
- Petruccelli, A. (2005). *Docentes y piqueteros. De la huelga de ATEN a la pueblada de Cutral Có*. Buenos Aires: Ediciones El Cielo por Asalto
- Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Verón, E. (1987). La palabra adversativa. En Verón, A. et al (Ed), *El discurso político. Lenguajes y acontecimientos*. Buenos Aires: Hachette.
- Van Dijk, T. (1996) *La noticia como discurso*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Vasilachis de Gialdino, I. (1997). *Discurso político y prensa escrita. La construcción de representaciones sociales*. Barcelona: Gedisa Editorial.